



Sr. Amilivia González, Presidente

Sr. Ramos Antón, Consejero  
Sr. Sobrini Lacruz, Consejero y  
Ponente

Sra. García Fonseca, Secretaria

La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Valladolid el día 1 de febrero de 2017, ha examinado el *procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada a instancia de ssss, S.A.*, y a la vista del mismo y tal como corresponde a sus competencias, emite, por unanimidad, el siguiente

## **DICTAMEN**

### **I**

#### **ANTECEDENTES DE HECHO**

El día 16 de enero de 2017 tuvo entrada en este Consejo Consultivo la solicitud de dictamen preceptivo sobre el *procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada a instancia de ssss, S.A., representada por D. xxxx, debido a los daños ocasionados en un accidente por la irrupción de un animal en la calzada.*

Examinada la solicitud y admitida a trámite el 17 de enero de 2017, se procedió a darle entrada en el registro específico de expedientes del Consejo con el número de referencia 6/2017, iniciándose el cómputo del plazo para la emisión del dictamen, tal como dispone el artículo 52 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Castilla y León, aprobado por la Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Mesa de las Cortes de Castilla y León. Turnado por el Sr. Presidente del Consejo, correspondió su ponencia al Consejero Sr. Sobrini Lacruz.

**Primero.-** El 9 de marzo de 2016 ssss, S.A., representada por D. xxxx, presenta en el registro de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en xxx una reclamación de responsabilidad patrimonial, debido a los daños causados en un accidente acaecido el 22 de mayo de 2015 en el punto kilométrico 68,700 de la carretera autonómica xx, dirección xxx, al colisionar el vehículo,



matrícula mmm, con un corzo que irrumpió en la calzada, con resultado de daños de uno de los ocupantes y del propio vehículo.

Considera que existe responsabilidad de la Administración Autonómica como titular de la vía en la que se produjo el siniestro, al incumplir el deber de conservación y mantenimiento de aquélla en condiciones de seguridad que impidan accidentes. En este sentido, alude a la falta de señalización, pasos elevados, vallados o pasos subterráneos de cierre que impidan el paso de animales y a que en la vía se han producido numerosos siniestros.

Acompaña a la reclamación copias de poder para pleitos; del informe estadístico Arena de la Dirección General de Tráfico; del informe de la Delegación Territorial de xxx de 2 de octubre de 2007, en el que se indica que la carretera donde se produjo el accidente es de titularidad autonómica; de otro informe de la Delegación Territorial de 12 de enero de 2016, en el que se señala que los terrenos limítrofes con el lugar del accidente están dentro del Coto Privado de Caza ccc y que no se tiene constancia de haberse practicado cacería alguna ni el mismo día del accidente, ni en los inmediatos anteriores; del informe estadístico de accidentes de tráfico con intervención de animales en la carretera xx entre los puntos kilométricos 58,700 y el punto kilométrico 78,700 en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015; de la póliza de seguro; del informe de valoración de daños en el vehículo; de la factura de reparación del vehículo por importe de 4.507,48 euros; de diversa documentación médica y de documentación acreditativa de que el conductor del vehículo y su acompañante han recibido las cantidades que reclama la aseguradora.

Solicita una indemnización de 8.397,08 euros por las cantidades abonadas por la compañía aseguradora como consecuencia de los daños personales y materiales sufridos.

**Segundo.-** El 16 de marzo se admite a trámite la reclamación y se nombra instructora y secretario del procedimiento.

**Tercero.-** El 11 de mayo la Jefe de la Sección de Vida Silvestre del Servicio Territorial de Medio Ambiente informa de que "revisada la documentación obrante en los archivos de este Servicio Territorial de Medio Ambiente y comprobado sobre el terreno el lugar indicado, le informo que los terrenos limítrofes al punto kilométrico 68,700 de la carretera xx están incluidos dentro de



los límites del Coto Privado de Caza ccc1, del término municipal de xxx1, cuya titularidad ostenta la Junta Vecinal de xxx2,...”.

**Cuarto.-** El 3 de mayo el encargado del parque de maquinaria del Servicio Territorial de Fomento informa que “Dada la magnitud del siniestro el desglose de piezas y mano de obra corresponde a la reparación. El informe no valora estado del vehículo como profundidad del dibujo de neumáticos. Destacar el fallo en los sistemas de seguridad del vehículo ante semejante golpe, pretensores de cinturón...”.

**Quinto.-** El 31 de mayo el Jefe de la Sección de Conservación y Explotación del Servicio Territorial de Fomento emite un informe en el que señala:

“1º.- Que la carretera xx, de xxx a xxx3, es de titularidad autonómica en todo su recorrido.

»2º.- Que todas las carretera de titularidad autonómica son vigiladas de forma periódica en días laborables, dentro de la jornada ordinaria de trabajo, por los correspondientes equipos de vigilancia, cuya misión es, entre otras, la de realizar pequeñas reparaciones (retirada de objetos caídos en la calzada, limpieza de pequeños desprendimientos, etc.), la de comunicar los desperfectos que ellos no puedan solucionar y señalar aquellos que representen un peligro para la circulación. En días no laborables o bien fuera de la jornada ordinaria de trabajo en días laborables, y siempre que se comunique la incidencia, se intenta resolver la misma con la mayor urgencia posible.

»3º.- Que en la zona en que se produjo el daño, p.k. 68+700 de la carretera xx, de xxx a xxx3, existía en el día 22 de mayo de 2015 señalización de advertencia de peligro consistente en:

»a) Margen izquierdo de la carretera xx, de xxx a xxx3, p.k. 71+350, sentido xxx: señal de código de advertencia de peligro P-24, (Paso de animales en libertad) y señal complementaria S-810 (longitud del tramo peligroso o sujeto a prescripción en 5,5 km). Esta señalización fue instalada el 29 de mayo de 2008.

»b) Margen izquierdo de la carretera xx, de xxx a xxx3, p.k. 72+560, sentido xxx: existe cartel o panel complementario informativo con la



inscripción "Atención - paso de animales en libertad-Modere su velocidad". Esta señalización fue instalada en noviembre de 2004.

»4º.- No existe en la zona ni pasos cinegéticos, ni valla de cerramiento longitudinal de la carretera.

»5º.- Entiendo que no se ha producido anormal funcionamiento de los servicios de conservación de la vía ya que no se ha tenido conocimiento de ninguna incidencia en la fecha señalada en el punto kilométrico indicado en la reclamación”.

**Sexto.-** Concedido trámite de audiencia a la reclamante, el 22 de julio presenta alegaciones en las que reitera la pretensión.

**Séptimo.-** El 30 de septiembre se formula propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación.

**Octavo.-** El 7 de octubre de 2016 la Asesoría Jurídica de la Delegación Territorial informa favorablemente la propuesta de resolución indicada.

En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen.

## **II CONSIDERACIONES JURÍDICAS**

**1ª.-** El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el presente expediente con carácter preceptivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.i), 1º de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, correspondiendo a la Sección Primera emitir el dictamen según lo establecido en el apartado tercero, 1.g) del Acuerdo de 6 de marzo de 2014, del Pleno del Consejo, por el que se determina la composición y competencias de las Secciones.

**2ª.-** El procedimiento se ha instruido con arreglo a lo previsto en los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrollados por el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones



Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, aplicables *ratione temporis*.

**3ª.-** Concurren en la reclamante los requisitos de capacidad y legitimación exigidos por la referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y se ha acreditado la representación en los términos que en ella se establecen. En concreto, la legitimación de la entidad aseguradora se desprende de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, según el cual "El asegurador, una vez pagada la indemnización, podrá ejercitar los derechos y las acciones que por razón del siniestro correspondieran al asegurado frente a las personas responsables del mismo, hasta el límite de la indemnización".

La competencia para resolver la presente reclamación corresponde al Delegado Territorial de Junta de Castilla y León en la provincia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 12/2012, de 29 de marzo, por el que se desconcentran competencias en el titular de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en los titulares de sus Órganos Directivos Centrales y en los de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León.

La reclamación se ha interpuesto en tiempo hábil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

**4ª.-** El artículo 106.2 de la Constitución establece que "Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos".

La referencia constitucional a la ley debe entenderse hecha a los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a la que además se remite el artículo 82.1 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la doctrina del Consejo de Estado así como la de este Consejo Consultivo, la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública exige la concurrencia de los siguientes requisitos:



a) La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

b) El carácter antijurídico del daño, en el sentido de que la persona que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, de acuerdo con la ley.

c) La imputabilidad a la Administración de la actividad dañosa, es decir, la integración del agente en el marco de la organización administrativa a la que pertenece o la titularidad pública del servicio o actividad en cuyo ámbito se produce el daño.

d) La relación de causa a efecto entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, nexos causales que implica la necesidad de que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público o actividad administrativa en relación directa e inmediata.

e) Ausencia de fuerza mayor.

f) Que no haya transcurrido un año desde el momento en que se produjo el hecho causante.

**5ª.-** En cuanto al fondo de la cuestión planteada, el análisis de las circunstancias que concurren en el caso sometido a dictamen permite apreciar la inexistencia de responsabilidad patrimonial de la Administración.

Ha quedado acreditado que los daños que fundamentan la reclamación se produjeron en un accidente acaecido al colisionar el vehículo con un corzo que irrumpió en la calzada, a la altura del punto kilométrico 68,700 de la carretera autonómica xx.

El corzo tiene la consideración de especie cinegética de caza mayor, tal y como se deducía del anexo del Decreto 65/2011, de 23 de noviembre, por el que se regulaba la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre, norma aplicable al ocurrir los hechos. En el mismo sentido se pronuncian los artículos 13.1 y 14 del Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre, así como el artículo 9 de



la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León y las órdenes anuales de caza de la Consejería de Medio Ambiente.

De acuerdo con el apartado 1 del artículo 12 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, "La responsabilidad por los daños producidos por las piezas de caza en los terrenos cinegéticos, en los refugios de fauna y en las zonas de seguridad se determinará conforme a lo establecido en la legislación estatal que resulte de aplicación. La responsabilidad por los accidentes de tráfico provocados por las especies cinegéticas se determinará conforme a la normativa sobre tráfico y seguridad vial vigente".

Con arreglo a ello, la normativa de aplicación, vigente en el momento del accidente, es la disposición adicional novena de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, texto articulado aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en la redacción dada por la Ley 6/2014, de 7 de abril, vigente en el momento de los hechos, que establece:

"En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas en las vías públicas será responsable de los daños a personas o bienes el conductor del vehículo, sin que pueda reclamarse por el valor de los animales que irrumpen en aquéllas.

»No obstante, será responsable de los daños a personas o bienes el titular del aprovechamiento cinegético o, en su defecto, el propietario del terreno, cuando el accidente de tráfico sea consecuencia directa de una acción de caza colectiva de una especie de caza mayor llevada a cabo el mismo día o que haya concluido doce horas antes de aquél.

»También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produzca el accidente como consecuencia de no haber reparado la valla de cerramiento en plazo, en su caso, o por no disponer de la señalización específica de animales sueltos en tramos con alta accidentalidad por colisión de vehículos con los mismos".

La nueva redacción de esta disposición adicional establece, como regla general, la responsabilidad del conductor por todos los daños "a personas o bienes" derivados de los accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas en las vías públicas. Es una norma de atribución o



imputación legal objetiva de responsabilidad al conductor del vehículo, que no se basa, por tanto, en su nivel de diligencia o negligencia en la conducción del vehículo, ni en el incumplimiento de las normas de tráfico.

Esta modificación restringe la responsabilidad del titular del aprovechamiento cinegético o del propietario del terreno por cuanto, con anterioridad a dicha modificación, respondían "cuando el accidente sea consecuencia directa de la acción de cazar", sin excluir ni las acciones de caza individuales ni la caza de especies de caza menor, o "de una falta de diligencia en la conservación del terreno acotado".

En lo que ahora interesa, también se limita el ámbito de la responsabilidad del titular de la vía, el cual antes podía erigirse en responsable del accidente por inobservancia de su deber de conservación o señalización de la carretera, expresión más amplia que la vigente que ciñe la responsabilidad a los casos en que la Administración encargada del cuidado de la vía, una vez advertida, no haya reparado el cerramiento en plazo o bien no haya señalado el peligro por animales sueltos en tramos de alta accidentalidad. Tales supuestos remiten a conceptos como el de estándar del servicio, a fin de apreciar la razonabilidad del plazo de cumplimiento de la obligación de reparación o al, también indeterminado, de elevada siniestralidad, cuya aplicación obligará a graduar ésta en atención a las circunstancias concurrentes en cada caso, al no establecer la norma parámetros objetivos para ello.

La Administración está obligada a la conservación y mantenimiento de las carreteras de las que sea titular y a realizar las actuaciones precisas para la defensa de la vía y su mejor uso, entre las que se incluyen las referentes a la señalización (artículo 15 de la entonces vigente Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras; artículo 48, apartados 1 y 2, del Reglamento General de Carreteras, aprobado por el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, y artículo 19 de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León). Asimismo, el artículo 57 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, antes citada, prevé que "Corresponde al titular de la vía la responsabilidad del mantenimiento de la misma en las mejores condiciones posibles de seguridad para la circulación y la instalación y conservación en ella de las adecuadas señales y marcas viales. También corresponde al titular de la vía la autorización previa para la instalación en ella de otras señales de





circulación. En caso de emergencia, los agentes de la autoridad podrán instalar señales circunstanciales sin autorización previa”.

En el presente caso, en el informe estadístico Arena, emitido por la Guardia Civil de Tráfico, no consta como factor concurrente en el accidente el estado o condición de la vía.

Sobre la señalización de la carretera, el artículo 149.5 del Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1.428/2003, de 21 de noviembre, y la Instrucción 8.1-IC, sobre señalización vertical de carreteras, establecen que la obligación de colocar la señal P-24, indicativa de paso de animales en libertad (peligro por la proximidad de un lugar donde frecuentemente la vía puede ser atravesada por animales en libertad), tendrá lugar cuando tal medida resulte pertinente al tratarse de un hecho habitual; esto es, cuando se trate de una vía que frecuentemente sea atravesada por animales.

En el informe del Jefe de Sección de Conservación y Explotación del Servicio Territorial de Fomento se pone de manifiesto la existencia en la vía, en la fecha del accidente, de la señalización de peligro de animales sueltos P-24, señal complementaria S-810 y cartel informativo entre los puntos kilométricos en que tuvo lugar el accidente. Por otro lado, no existe obligación de vallar las carreteras, como ya ha manifestado este Consejo Consultivo en otros dictámenes (por todos, Dictamen 921/2007), hecho que puede resultar contraproducente ya que, si se tiene en cuenta la longitud de los tramos a ambos lados de la carretera, se produciría un efecto túnel y los accidentes tendrían consecuencias más peligrosas, pues los animales no encontrarían salida y correrían a lo largo de la valla.

En conclusión, la reclamación debe desestimarse.

### **III CONCLUSIONES**

En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla y León informa:

Procede dictar resolución desestimatoria en el procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación



**CONSEJO  
CONSULTIVO**  
DE CASTILLA Y LEÓN

presentada a instancia de ssss, S.A., representada por D. xxxx, debido a los daños ocasionados en un accidente por la irrupción de un animal en la calzada.

No obstante, V.E. resolverá lo que estime más acertado.